



PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS  
POLÍTICO, NO. 67

NOVIEMBRE 2012

# Poder único y total



## Dictadura militar y neo-totalitarismos

Cualquier ciudadano nicaragüense que conoce la historia reciente del país difícilmente no estará de acuerdo en reconocer la naturaleza dictatorial, patrimonial y represiva del régimen somocista. Sin embargo, es indispensable decir que en sus orígenes, el somocismo no necesariamente era considerado un régimen dictatorial. Esa característica quedó en evidencia cuando el ejercicio del poder totalitario y la represión abierta lo condujeron a un

**P**ara muchos ciudadanos nicaragüenses, el régimen que gobierna al país tiene las características de una dictadura, mientras para otros, sobre todo algunos que recuerdan la época represiva del somocismo, esta es una afirmación muy fuerte que no se corresponde a la realidad. Ciertamente, este gobierno no es igual al somocismo. Son diferentes en muchas cosas, tanto en la forma como en la práctica. Pero en lo que si coinciden es en el objetivo del poder total, y la estrategia que la pareja Ortega-Murillo ha empleado para alcanzarlo no es ingenua ni casual.

PERSPECTIVAS es una publicación del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), y es parte del Observatorio de la Gobernabilidad que desarrolla esta institución. Está bajo la responsabilidad de nuestro equipo de investigadores: Elvira Cuadra, Angel Saldomando y Sofía Montenegro. Si desea recibir la versión electrónica de este suplemento, favor dirigirse a: [cinco@cinco.org.ni](mailto:cinco@cinco.org.ni)

El presente boletín de análisis se ha realizado gracias al apoyo financiero de



proceso de descomposición tal que culminó con su derrocamiento en 1979.

Es necesario recordar que el régimen somocista y el poder político y económico que logró construir fueron la consecuencia de una época en la que los regímenes dictatoriales militares eran el común denominador en América Latina. En la actualidad es difícil encontrar regímenes de tal naturaleza en el hemisferio y aun en otras partes del mundo, sobre todo porque el principio de los regímenes democráticos se ha extendido de forma global y todos los gobiernos que muestran tendencias autoritarias se cuidan mucho de guardar las formas so pena de la sanción y el rechazo internacional.

De tal manera que es hasta iluso pensar que un régimen autoritario de esta época, especialmente en Latinoamérica, va a mostrar las características y el comportamiento típico de las viejas dictaduras militares. Sencillamente, el poder no es el mismo, los ciudadanos tampoco y el contexto nacional e internacional tampoco es el mismo.

Pero la lógica del poder autoritario es el control total, por eso el gobierno Ortega-Murillo no renuncia a un proyecto de concentración del poder y ha puesto en marcha una estrategia para controlar a los ciudadanos y asegurar su permanencia en el poder. Esa estrategia les ha dado resultados a lo largo del tiempo y se ha extendido a los ámbitos más importantes de la sociedad nicaragüense, asumiendo las formas de los neo-totalitarismos en un recorrido

que comenzó antes de llegar a la presidencia en el 2007.

### El control del poder y sus recursos

En ese recorrido, el primer paso del grupo Ortega-Murillo fue lograr el control del aparato partidario dentro del FSLN, de tal manera que les permitiera asegurar su cuota de poder y acallar las disidencias internas. El partido se convirtió entonces



en el vehículo para negociar cuotas de poder más grandes con otras fuerzas políticas, tal como se hizo evidente con el pacto Alemán-Ortega en el año 2000 y sus renegociaciones posteriores. Esos pactos fueron la llave para llegar a la presidencia en el año 2007.

Una vez alcanzado ese objetivo, el siguiente fue el control de los recursos institucionales para el ejercicio del poder en dos sentidos: el control de los demás poderes estatales, es decir, la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral; pero además, el control de los recursos del aparato de gobierno, ya fueran éstos materiales, humanos y simbó-

licos. De esa manera, el estado en su conjunto se puso al servicio de un proyecto personal de ejercicio del poder.

En ese esquema de control institucional, la ley y la legalidad son meros instrumentos del poder, de ahí que la Constitución y las leyes del país no tengan ninguna significación para limitar o sujetar las decisiones personales. Y si en años anteriores tuvieron el cuidado de guardar las apariencias de legalidad, durante la última época las máscaras han caído totalmente.

Las políticas públicas, por su lado, no son más que meros instrumentos para la fidelización de ciertos grupos sociales, especialmente aquellos que sirven a los propósitos de Ortega para otorgarse una falsa legitimidad. En resumen, el poder personal prevalece en todos los niveles de la gestión gubernamental y

en todas las acciones estatales.

### La construcción de un patrimonio propio

Entre todos los grupos dentro del FSLN, el de Ortega fue uno de los más marginados durante la década de los 90 porque no contaban con recursos económicos como si tenían otras corrientes internas. Esa fue una desventaja tanto dentro del partido como para negociar con otras fuerzas políticas. Sin embargo, una vez que lograron el control de partido y del esquema de transacciones políticas hacia afuera, esta situación comenzó a cambiar.

Con la llegada de Ortega a la presidencia en el 2007 se inició un

proceso de acumulación acelerada de capital y la constitución de un grupo de poder económico que ha descansado principalmente en tres elementos: el manejo privado y discrecional de los fondos de cooperación venezolanos, el tráfico de influencias y el uso poco transparente de los recursos estatales, el desplazamiento de otros grupos de poder económico dentro del FSLN, y la neutralización del gran capital y la inversión privada internacional.

El grupo cuenta hoy con el control monopólico de los ejes más dinámicos de la economía nacional. Su naturaleza es patrimonial familiar, pues su administración está confiada a los miembros del grupo familiar presidencial y algunos allegados. Y está cimentado en la lógica continuista del modelo neoliberal establecido durante administraciones de gobierno anteriores, la cual han aprovechado muy bien para incrementar aceleradamente su capital.

### El uso de la fuerza y la represión

Como todo régimen político, el orteguismo sabe que ejercer control sobre el ejército y la policía es un tema clave en el ejercicio del poder. Recién llegado a la presidencia, una de las primeras acciones de Ortega consistió en tratar de cooptar a ambas instituciones, pero sus intentos no resultaron de primas a primeras debido a que ambas instituciones habían desarrollado procesos de fortalecimiento que les habían asegurado autonomía institucional y recursos económicos propios. En ese momento se conformaron con neutralizar a las dos instituciones sin resignarse a controlarlas.

El anzuelo que encontraron para lograr su objetivo fue el de la cooptación y subordinación gradual a partir de beneficios económicos y la colocación de oficiales retirados en puestos clave dentro de las insti-

tuciones públicas, especialmente en el caso del ejército.

La policía siempre fue institucionalmente más débil que el ejército por el nivel de subordinación respecto a la presidencia y por su cercana exposición a la ciudadanía, sobre todo porque de acuerdo a las funciones y a la ley, le corresponde lidiar con las protestas y expresiones de descontento. De ahí que el



interés del gobierno se enfocó en subordinarla desde el principio. Las acciones de Ortega arrastraron a la institución policial a la ilegalidad con la designación de su directora mediante un decreto presidencial, alterando el proceso y las normas institucionales, pero además, la llevaron tempranamente a actuaciones parciales en favor del gobierno y sus partidarios en el tratamiento de la protesta y las expresiones ciudadanas de descontento.

El resurgimiento de la violencia política en el país y su incrementó da cuenta como las actuaciones parciales de la policía se han venido acentuando durante los últimos

años, hasta producir un giro crítico de la institución hacia la represión y la intimidación abierta de los ciudadanos. Las denuncias de abusos, violaciones a los derechos humanos y la militarización de poblados se han convertido ya en un comportamiento recurrente, especialmente en los casos de El Carrizo, Ciudad Darío, Nueva Guinea, Matiguás y La Paz Centro, para citar los más graves. Y en algunos casos el ejército también ha colaborado en las acciones represivas y de intimidación. Pero este patrón autoritario en el ejercicio de la fuerza, se ha trasladado también a las protestas ciudadanas por razones estrictamente sociales, tal como ocurrió recientemente en el poblado de Santa Pancha.

El silencio del gobierno y las respuestas de la jefatura policial a las denuncias y reclamos públicos lo único que ponen en evidencia es que la institución policial ha entrado en un proceso de descomposición que a la larga tendrá consecuencias en la credibilidad y legitimidad que ha tenido hasta ahora entre la ciudadanía.

Pero el hecho más grave de todos es la pasividad y complicidad policial con el surgimiento y la actuación de grupos paramilitares afines al gobierno que participan activamente en las acciones de represión e intimidación de ciudadanos.

### Ciudadanos en el vacío

En un régimen de tal naturaleza, los ciudadanos tienen esa categoría pero solamente en una dimensión estrictamente formal y para cumplir con sus deberes respecto al estado, como por ejemplo, el pago puntual de los impuestos y las cargas tributarias. Eso precisamente ha ocurrido en Nicaragua, donde además, ha ocurrido un proceso de restricción de derechos y libertades que incluye el desmontaje del tendido organizativo autónomo de la sociedad civil y el cierre de los espacios de partici-



pación ciudadanos para la toma de decisiones en los asuntos públicos.

El desmontaje organizativo se ha realizado a través de la intimidación y cooptación de organizaciones sociales a todos los niveles y en todos los sectores, y el condicionamiento de los fondos de cooperación dirigidos a actividades cívicas y para el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad. Mientras tanto, el cierre de los espacios de participación ha consistido en la expulsión, sustitución y desmontaje de espacios de diálogo y concertación creados con anterioridad, tales como los Comités de Desarrollo Municipales, verdaderos espacios de deliberación local para el desarrollo.

En contraposición a los actores y organizaciones de sociedad civil se ha instalado una estructura de control territorial a través de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, como órganos de vigilancia y control social para atemorizar, intimidar y fidelizar a los ciudadanos. Los CPC son los ejecutores directos de las políticas populistas del gobierno en las localidades y de la contención violenta del descontento y las expresiones de protesta ciudadana. Esta estructura paralela que responde más a los intereses personales de la pareja presidencial que al partido propiamente, ha desplazado incluso a la estructura de militantes históricos dentro del FSLN, y se acompaña de otras formas de organización como la reanimada Juventud Sandinista y las organizaciones gremiales cooptadas como los sindicatos magisteriales y de salud.

Mientras el control de la sociedad civil y de los ciudadanos en los territorios tienen el objetivo de contener la organización ciudadana y las posibilidades de movilización y protesta, hay otras que se encaminan a controlar los sentimientos y las ideas con un discurso de pensamiento único. Este discurso se enfoca en exaltar la presencia única y omnipresente de Ortega y Murillo.

La diseminación del discurso único se hace a través de diferentes vías. Una de ellas es el control de la información y de los medios de comunicación. El punto de partida es la vocería única

de Rosario Murillo, pero se acompaña de una estrategia de (in)comunicación que controla el acceso de los ciudadanos y de los medios de comunicación a la información pública. A esto se agrega el control sobre los medios de comunicación y la agenda pública para lo cual han optado por construir un monopolio mediático propio y el silenciamiento de los periodistas y espacios independientes de comunicación.

La manipulación de los símbolos políticos y religiosos es el otro elemento presente en el discurso único con la apelación y la representación de la gesta revolucionaria y las creencias religiosas en cada una de las declaraciones y apariciones públicas, pero también en las gigantografías de la pareja presidencial instaladas a todo lo largo del país. La manipulación de los símbolos de la revolución tiene el propósito de mantener la fidelidad de los militantes y simpatizantes del partido alrededor de la figura de Daniel Ortega, así como legitimar sus decisiones. Sin embargo, el proceso de cambios que se vive a lo interno del FSLN y la sustitución gradual de la militancia histórica por los nuevos militantes fieles a la pareja presidencial ha venido resquebrajando esa manipulación para finalmente convertirse únicamente en la autogratificación y autolegitimación.

Por su lado, la manipulación religiosa está dirigida a los sentimientos y creencias de la mayoría de la población nicaragüense. Esto ha pasado por la instrumentalización de los liderazgos religiosos católicos y evangélicos, los ritos y celebraciones religiosas, y una exaltación exagerada de lo religioso en los discursos públicos a fin de hacer creer que la autoridad del gobierno tiene una investidura divina.

### **La acción contra el pesimismo**

Analizar en conjunto las formas de ejercicio del poder en la Nicaragua actual, antes que atemorizar e impregnar de pesimismo a los ciudadanos, lo que intenta es revelar con claridad los enormes retos a los que se enfrenta la socie-

dad en su conjunto si quiere volver al camino de la senda democrática. Este análisis rechaza las actitudes de resignación y acomodamiento que se encuentran en algunos líderes y actores políticos bajo el argumento de que este tipo de poder es aplastante y poco se puede hacer.

Ciertamente que este tipo de poder es autoritario por naturaleza y que su principal objetivo es el control y la sumisión total de los ciudadanos. Pero precisamente en las demostraciones de poder es donde reside su más grande debilidad, pues en la medida en que el régimen tiene que mostrar su fuerza bruta y reprimir abiertamente a los ciudadanos se puede observar que su estrategia no tiene éxito y no puede dominar a la mayoría de la sociedad nicaragüense. La demostración palpable está en los resultados de las elecciones municipales últimas pues el alto porcentaje de abstención no es la evidencia de la apatía, sino del rechazo. Los viejos métodos ya no funcionan, el tiempo de las dictaduras militares está en el pasado, los ciudadanos son otros y su forma de pensar también.

Los liderazgos políticos tienen la responsabilidad de formular una nueva propuesta de proyecto político que restituya verdaderamente el espíritu, los valores y la forma de la democracia a la sociedad nicaragüense. También tienen la responsabilidad de representar dignamente a los ciudadanos frente a este poder y para eso no basta acomodarse o resignarse, negociar con el poder o participar en su juego. Hace falta que se pongan al frente y salgan a acompañar a la mayoría de la población en sus anhelos de cambios. El año que comenzará pronto es un buen momento para iniciar ese camino y construir una propuesta política de mediano plazo, más allá de las coyunturas electorales y que responda verdaderamente a los deseos y necesidades de la sociedad nicaragüense.